

JEAN PIERRE GARNIER

La invisibilización urbana de las clases populares

La invisibilización de las clases populares es un fenómeno social tan amplio que trasciende a lo que acontece en la ciudad. No obstante, adquiere una dimensión propiamente urbana de gran relevancia. Tiene mucho que ver con el tipo de intervenciones sobre el mundo urbano que despliega el poder económico y político, expulsando a las clases populares hacia la periferia y organizando su dispersión espacial. El derecho a la ciudad sigue siendo hoy en día una aspiración que, para ser satisfecha, requiere la construcción de un régimen realmente democrático que permita a las clases populares un reconocimiento y una presencia en el espacio urbano.

«¿Dónde se ha metido el pueblo?» Este es el título un tanto provocador de un monográfico de la revista *Espaces et sociétés* que tiene por objeto contribuir a poner fin a una aberración a la vez científica y política: la ocultación de la presencia de una porción significativa de la población francesa en la sociedad y, en consecuencia, también en el espacio.¹ Desde hace ya algunas décadas, da la impresión que las clases trabajadoras han ido perdiéndose de vista tanto en el discurso político como en los medios de comunicación e incluso en la producción científica, a pesar de las incursiones de algunos investigadores en el medio obrero. Es como si hubieran desaparecido del campo de visión de los que, de una forma u otra, se precian de escrutar el estado de Francia. Es cierto que de vez en cuando se dignan a interesarse por ellas cuando constituyen el tema central de una crónica policial o electoral. Pero siempre lo hacen de forma negativa, bien para condenar las “violencias urbanas” a cargo de ciertos sectores de la juventud, bien para fustigar ritualmente a los adultos por no votar correctamente o simplemente por abstenerse de votar.

Sin pretender agotar el tema, los artículos reunidos en aquel monográfico de *Espaces et sociétés* desvelaron diversas facetas de la “condición urbana”

Jean Pierre Garnier es sociólogo urbano y autor de *La deuxième droite* (Agone, Marsella, 2013), *Une violence éminemment contemporaine: essais sur la ville, la petite bourgeoisie intellectuelle et l'effacement des classes populaires* (Agone, Marsella, 2010) y *Contra los territorios del poder: por un espacio público de debates y... de combates* (Virus, Barcelona, 2006)

¹ A. Clerval y J. P. Garnier (dir.), «Où est passé le peuple?», *Espaces et sociétés*, núm. 156-157, 2014.

de las clases populares que, hasta entonces, las más de las veces, habían quedado en la sombra. Al contrario de los enfoques superficiales teñidos de miserabilismo que aún prevalecen, se hacía evidente que su descomposición (aspecto sobre el que se pone el acento habitualmente) iba a la par de recomposiciones que contradecían las conclusiones precipitadas –y a veces interesadas– de una desaparición anunciada.

Sin embargo, al querer orientar la interpretación en un sentido contrario para invalidar la tesis de la desintegración irremediable de las clases llamadas “subalternas” y destacar las nuevas formas de resistencia, de solidaridad y de creatividad populares aparecidas en espacios urbanos donde habitan, se corre el riesgo de subestimar (o incluso obviar) un proceso que lleva la marca, por así decirlo, de la urbanización capitalista contemporánea y que tiene importantes consecuencias antropológicas y políticas: la invisibilización urbana de las clases populares que habitan la ciudad. Porque una cosa es que hayan sido borradas de la ideología dominante y otra bien distinta que estos habitantes “de segunda” hayan acabado, finalmente, por no contar como ciudadanos efectivos en la escena urbana.

En busca de una clase perdida

Dado que, salvo para los científicos, la neutralidad axiológica no existe en las ciencias sociales, conviene precisar desde el principio con qué corriente de la sociología urbana se relacionan las herramientas teóricas elegidas para describir y analizar el proceso que nos ocupa. Por supuesto se trata de una corriente crítica, pues de no ser así resultaría difícil comprender por qué la invisibilización de las clases populares urbanas podría constituir objeto de preocupación (aunque, claro, también podría ser para alegrarse, como pasa con los defensores de la “ciudad creativa” o de la *smart city*). Pero ¿de qué sociología crítica se trata? Añadir el adjetivo “radical” importado de los campus universitarios estadounidenses es de poca utilidad de tanto como se ha usado y abusado del término. Por ello, digamos que, a falta de otra mejor, se trata de una sociología de inspiración “marxiano-bourdiesiana”.

Lo anterior se va a poder apreciar en seguida en la problemática escogida para abordar el tema de la invisibilización urbana de las clases populares. Pero antes de preguntar en qué consiste esa invisibilización, es preciso plantear qué se entiende por eso que está a punto de volverse menos visible (si es que no es ya invisible), es decir, las clases populares. Las dos cuestiones están relacionadas, como vamos a ver. A continuación, trataré la dimensión propiamente urbana de esta invisibilización, ya que, antes que urbano, se trata de un fenómeno social general.

Hablar de clases populares en Francia hoy día –no sólo en los medios políticos y mediáticos sino también en el medio académico– conlleva el riesgo de ser calificado de marxista o,

como está de moda desde hace algún tiempo, populista. Y aún es peor hablar de “lucha de clases”: lueven entonces las acusaciones de extremismo, estalinismo, simplismo, arcaísmo.

Las clases sociales existen sólo a través de la relaciones de clase: relaciones de explotación económica, de dominación política y de sujeción ideológica que son hoy, sin duda alguna, más preceptibles que nunca

Acepto pasar por marxista o marxiano ya que así me reivindicó. Sobre la acusación de populismo, volveré más tarde. En cuanto a la simpleza, mi punto de partida es efectivamente simple, lo que no quiere decir simplista. Vivimos en una sociedad capitalista y, por lo tanto, de clases, digan lo que digan los sociólogos que se apresuran a entonar un réquiem por las clases sociales, como si la “sociedad salarial” que ensalzan como concepto de remplazo fuese capaz de poner fin a la existencia de aquéllas.² Pero las clases sociales existen sólo a través de la relaciones de clase: relaciones de explotación económica, de dominación política y de sujeción ideológica que son hoy, sin duda alguna, más preceptibles que nunca, aunque sus formas hayan cambiado desde que Marx, Engels y algunos teóricos anarquistas emprendiesen la tarea de describirlas para denunciarlas. No reconocer o no admitir la existencia de estas relaciones de clase, como hacen los partidarios políticos y soportes ideológicos de dicha sociedad, equivale a negar la realidad social. El problema es que precisamente estos están ganando desde los años 80 en Francia la batalla de las ideas paralelamente a la victoria de neoliberalismo en el campo económico. Se puede hablar en este sentido de una verdadera “reconquista” ideológica. Ciertas palabras o conceptos, considerados como no científicos, han sido erradicados. Me refiero, por ejemplo, a «burguesía», «proletariado», «explotación», «plusvalía» –excepto si se trata de la Bolsa–, «dominación», «enajenación» y, desde luego, «capitalismo» –sustituido por «economía de mercado»– o «clase» –sustituida por «categoría» o «grupo social». Desde finales de los años 70, todos ellos fueron eliminados del vocabulario de las ciencias sociales mayoritarias. Incluso la buena y vieja categoría de «trabajador» –como ironiza un sociólogo integracionista–³ ha sido abandonada y reemplazada por la de «ciudadano».

Este sociólogo, muy representativo de la corriente sociológica conformista que es ahora dominante en Francia y que ha reemplazado la explotación por la «exclusión» para redefinir la «cuestión social»,⁴ reconoce que, de todo ello, resulta un problema “difícil” para los

² M. Kokoreff y J. Rodrigez, *Une France en mutation Globalisation, État, Individus*, Petite bibliothèque Payot, 2013.

³ D. Merklen, *Quartiers populaires, quartiers politiques*, La Dispute, Paris, 2009.

⁴ La sociología integracionista se basa en la negación de las contradicciones de clases. El enfoque integracionista plantea que los problemas de las clases populares estriban en una “falta de integración” dentro de un modelo de sociedad que no se puede cuestionar, la sociedad capitalista.

investigadores que estudian la evolución de las clases populares: por haber «abandonado el tema de la revolución para comprometerse en favor de la democracia, les cuesta mucho trabajar con la expresión “clases sociales”, y aún más adjetivarla con una palabra tan vulgar como “populares”».

Estos escrúpulos de los investigadores frente a conceptos que suelen tachar de anticuados pueden resultar cómicos, sobre todo si se tiene en cuenta la vigencia efectiva de los mismos de la que da fe la famosa declaración hecha en la cadena CNN, en 2005, por uno de los hombres más ricos del mundo, el *businessman* estadounidense Warren Buffet (y que reiteró por escrito en el *New York Times* un año después): «La guerra de clases existe, es un hecho, y mi clase, la de los ricos, que es la que está haciendo esta guerra, la está ganando».

Esta declaración ilustra perfectamente la paradoja de que es la burguesía la que tiene hoy una fuerte conciencia de clase, mientras que no ocurre lo mismo con la clase obrera ni con las clases populares en general. Y aquí empieza su invisibilización: no sólo opera en los discursos que hacen las clases dominantes, sino también en aquellos que las clases populares hacen sobre ellas mismas. A este respecto, resulta conveniente recordar la distinción que hizo Marx entre «clase en sí misma» y «clase para sí misma».

La *clase en sí misma* queda definida objetivamente por su lugar en las relaciones de producción. Así, la pertenencia a la clase obrera está basada en el hecho de que lo único que posee el obrero para vender es su fuerza de trabajo, que compra el burgués, poseedor de los medios de producción, lo que le permite explotar al obrero. Eso vale también para los empleados que ejecutan las tareas últimas en el sector “servicios” (transporte, comercio, información, etc.) –los “nuevos proletarios”–, ya que estas actividades están también en manos de capitalistas. Así pues, la clase en sí misma agrupa a los agentes que tienen *objetivamente* los mismos intereses, con independencia de lo que ellos piensen de su posición social.

En cambio, surge como *clase para sí misma* cuando es consciente de la convergencia de sus intereses y se moviliza para defenderlos, cuando se dota de representantes y de instituciones, de objetivos y programas para organizarse. Ahora bien, numerosos estudios sociológicos han mostrado que la burguesía es la última clase realmente consciente de sus intereses y totalmente implicada en perpetuarlos. Y, de hecho, desde el principio de la crisis (me refiero al periodo que se abrió a finales de los años 60 del siglo pasado en los Estados Unidos y en Inglaterra, y en la década siguiente en el resto de los países europeos), esta clase es la que triunfa más o menos discretamente.

Por el contrario, las clases populares contemporáneas no adquieren de forma espontánea la conciencia de tener una condición e identidad social común, si no es de una manera

vaga y confusa. Sienten intensamente el peso de las desigualdades percibidas como injusticias y saben bien que su vida tanto en el trabajo como en el tiempo libre es muy diferente de la de los ricos y las elites –ya sean económicas, políticas, intelectuales o artísticas–, pero no tienen una visión del mundo propia, no viven y no definen su condición laboral por medio de prácticas, valores y significaciones compartidas, forjadas en la separación y la autonomía cultural con respecto a las clases medias y superiores. En pocas palabras, no tienen conciencia de constituir una clase. Tienen tendencia a pensar según la ideología dominante, que no es tanto la de la misma burguesía como la que se difunde por sus instituciones (la escuela, en primer lugar, y, sobre todo, los medios de comunicación); una ideología que tiene como rasgos más sobresalientes el individualismo y el consumismo. Sin embargo, esta dominación ideológica no es absoluta y conlleva algunas fragilidades que se manifiestan en tiempos de crisis. Un ejemplo entre otros: pese a la intensa propaganda política y mediática a favor, una inmensa mayoría de las clases populares francesas (casi el 80% de los obreros y más del 70% de los empleados) votaron en el 2005 contra el Tratado Constitucional Europeo. Obreros y empleados saben, a través de su experiencia cotidiana, resumida en las palabras *austeridad* y *precarización* que Europa es la Europa neoliberal del capital –y no la del programa Erasmus reservado a una juventud privilegiada (menos que antes, sin embargo, con la proletarización incipiente de ésta)– que se burla de la supuesta soberanía popular que caracterizaría “nuestras democracias”.

**La burguesía tiene una fuerte conciencia de clase,
mientras que no ocurre lo mismo con la clase obrera
ni con las clases populares en general**

Pero, dejando de lado algunos contraejemplos, puede afirmarse que la conciencia de clase de las clases dominadas se ha vuelto muy débil y a menudo inexistente. En general, la actitud que predomina frente a la adversidad social no es la revuelta sino la resignación y la pasividad. Cuando los trabajadores salen hoy a la calle lo hacen para “defender sus empleos” –según el eslogan sindical que reivindica así inconscientemente el derecho a seguir siendo explotados– y no para exigir un aumento de los salarios y, aún menos, para luchar contra el capitalismo. En resumen, la lucha de clases sigue existiendo pero se desarrolla en el terreno institucional e ideológico del adversario burgués y se ha vuelto puramente defensiva en lo que a las clases populares se refiere.

¿Recomposición o descomposición?

Necesitaría mucho más espacio del disponible aquí para explicar con todo detalle las razones del decaimiento, cuando no la desaparición, de la conciencia en las clases populares.

Me limitaré a enumerar varios factores que han sido puestos de relieve por estudios realizados en Francia cuyos autores, si bien raramente mantienen posiciones anticapitalistas, al menos tienen el mérito de ser antiliberales:⁵

- primero, las transformaciones del modo de producción capitalista o, para que quede claro, del modo de explotación: disminución del porcentaje de obreros en la población activa debido a la desindustrialización y las deslocalizaciones y, por consiguiente, la minoración de su peso y su influencia en la sociedad;
- el carácter cada vez más abstracto del enemigo de clase como consecuencia de la transnacionalización y la financiarización del capital;
- el alejamiento entre los establecimientos industriales o comerciales y los centros de decisión, lo que fragiliza la eficiencia de los movimientos sociales en las unidades locales;
- la desaparición de los lugares de trabajo con mayor concentración de trabajadores (grandes fábricas, astilleros, minas, etc.) y el aumento de la proporción de obreros que trabajan en el sector servicios (transporte, mantenimiento...), ahora mayoritario;
- la flexibilización del mercado laboral con la extensión de formas de empleo temporal o a tiempo parcial, y el aumento del desempleo, es decir, la generalización de la precariedad, que tiene como efecto desestabilizar a los colectivos de trabajadores y obstaculizar la solidaridad y la resistencia;
- la reorganización del funcionamiento de las empresas (*new management*) con la individualización de las tareas y la acentuación de la división del trabajo, en particular entre obreros cualificados y no cualificados, obreros estables y precarios, trabajadores de “cuello blanco” y trabajadores de “cuello azul”;
- las innovaciones tecnológicas que separan a los trabajadores en base a su especialización;
- la difusión generalizada de los valores empresariales (participación, autonomía, mérito, competición para subir en la jerarquía).

La disminución cuantitativa, la diversificación y la atomización de las masas trabajadoras, como se decía antaño, van en contra de la permanencia de una cultura de clase común y de la acción colectiva. La flexibilidad y la segmentación del mercado del trabajo imponen una pluralidad de condiciones de trabajo, de ingresos y de relaciones profesionales que destruye la antigua solidaridad de clase obrera. Cabe apuntar a este respecto que la noción de *clases populares* es más adecuada que la de *clase obrera*: el plural hace resaltar el carácter cada vez más heterogéneo de las categorías populares en el período reciente. Así, éstas han perdido su cohesión social hasta el punto de volver incierta su identidad social. Y esto se traduce en el lenguaje: mientras que la denominación oficial de “operario” en las empresas industriales desclasifica y rebaja la de obrero, los trabajadores ya no se tratan entre sí

⁵ Y. Siblot, M. Cartier, I. Couant, O. Masclat y N. Renahy, *Sociologie des classes populaires contemporaines*, Armand Colin, Paris, 2015. Este libro colectivo propone una visión de conjunto de la evolución de las clases populares en Francia, sintetizando las investigaciones realizadas sobre este tema y acompañándolas de una rica bibliografía.

como compañeros sino como “colegas”, una evolución lingüística que refleja, y al mismo tiempo acentúa, la invisibilización de las clases populares.

La invisibilización de las clases populares es, en gran parte, una construcción social en el que el factor ideológico desempeña un papel relevante

No obstante, los factores socioeconómicos no bastan para explicar este fenómeno. No hay que olvidar que estas clases están todavía masivamente presentes en Francia. A pesar del carácter discutible de las estadísticas oficiales y, en particular, de los criterios de clasificación socio-profesional, se puede afirmar que los obreros representan todavía el 22,5% de la población activa y que alcanzan más del 25% si se incluye a los parados y jubilados. Si además sumamos los empleados poco cualificados del sector servicios –sobre todo empleadas, el 80% son mujeres–, cuya condición social es bastante semejante en varios aspectos a la de los obreros y cuyo número va en aumento, el proletariado constituiría hoy el 58% de la población francesa. En otras palabras, invisibilización no significa desaparición. Así pues, no es tanto la evolución de las clases populares en sí mismas lo que está en el origen de su invisibilización como la evolución de las clases populares para sí mismas. Esto significa que la invisibilización es, en gran parte, una construcción social en el que el factor ideológico desempeña un papel relevante, aunque también habría que considerar otros factores de tipo político y espacial.

A las lógicas objetivas de desestructuración y de dislocación de la clase obrera, así como de recomposición de las clases populares, se les suman las lógicas subjetivas de desvalorización y desmoralización del mundo del trabajo. En el plano político se puede decir que las clases populares están cada vez menos representadas en la escena política oficial. Como es notorio, los partidos de izquierdas han ido “aburguesando” su composición sociológica en las décadas de finales del siglo XX, lo que ha conllevado la desconexión con su base popular. Ya sea en referencia a sus líderes, a sus militantes o a su electorado, bien puede afirmarse que el Partido Socialista se ha vuelto fundamentalmente el partido de las clases medias educadas, es decir, de la «pequeña burguesía intelectual» (PBI).⁶ Aunque no quieran reconocerlo, el desprecio de las clases populares se ha convertido en moneda corriente entre sus filas, y su política, cuando está en el poder, no se distingue de la que desarrolla la derecha, salvo por las «cuestiones societales».⁷ Claro está que, amenazada por la proleta-

⁶ J. P. Garnier y L. Janover, *La deuxième droite*, Agone, Marsella, 2013 [Primera edición 1986].

⁷ Neologismo creado para designar la evolución de las costumbres, algo que interesa mucho a los “neo-pequeños burgueses”, pero que son diferentes de las cuestiones sociales que se plantean las clases populares, esto es, inestabilidad del empleo, rebaja del nivel de vida, desmantelamiento del Estado de bienestar, etc.

rización, parte de la PBI ha empezado a tomar también en cuenta estas cuestiones, pero esto no basta para poder seguir afirmando la ausencia de las clases populares en las instituciones políticas. En cuanto al Partido Comunista Francés, sus dirigentes y cuadros pertenecen también hoy mayoritariamente a la PBI del sector público, en particular, personal docente y socioeducativo, representantes, cuadros y expertos municipales, lo que explica que este partido haya abandonado su ambición de representar prioritariamente a las clases populares, excepto en los periodos electorales.⁸

Las clases populares, ausentes del campo político, tampoco están muy presentes en el campo sindical. La burocratización de los sindicatos, las divisiones y rivalidades entre ellos, sus arreglos con la izquierda oficial en el poder, el abandono de una «lógica de oposición» en provecho de una «lógica de proposición» –que es, de hecho, una lógica de colaboración de clases– y las derrotas sucesivas en la lucha contra el neoliberalismo han contribuido a la deserción de la base militante. Resultado: la tasa de sindicalización de los obreros y empleados (7%) no ha dejado de reducirse en el transcurso de los años.

Como concluyen a propósito de esta situación los sociólogos y politólogos que se pretenden críticos, las clases populares padecen una crisis de representación. Dicho de otro modo, las clases populares son políticamente invisibles. Esto no preocuparía mucho a la burguesía y a la PBI si no fuese porque esta crisis de representación popular pone en crisis la propia democracia representativa, y esto por dos vías:

- El “partido de los abstencionistas” (siempre más del 50%, salvo cuando se puede votar contra la Europa de Bruselas) es el “primer partido” en Francia, al que habría que sumar la gente que ni siquiera se inscribe en el censo electoral (y que somos el 12% de los ciudadanos en edad de votar). Pues bien, todas las investigaciones y los estudios muestran que la abstención es mucho mayor en el caso de las clases populares. Este desafecho deslegitima a un régimen que supuestamente encarna el reino de la soberanía popular pero que, sin embargo, se evidencia como una “democracia sin el pueblo”.
- Un porcentaje cada vez más importante de estas clases vota al Frente Nacional –la extrema derecha- no porque se hayan convertido en fascistas, sino porque detestan los partidos que se suceden en el poder para proseguir con la misma política al servicio del capitalismo. Dejando a un lado el debate sobre si esto representa un peligro para la democracia, sí hay un aspecto de este voto extremista que tiene que ver directamente con la invisibilización de las clases populares: el carácter populista de la propaganda del Frente Nacional a la que François Hollande acaba de reprochar que «habla, a través de los discursos de Marine Le Pen, como una octavilla de los años setenta del Partido

⁸ J. Mischi, *Le communisme désarmé. Le PCF et les classes populaires depuis les années 1970*, Agone, Marsella, 2014.

Comunista». Con este tipo de argumentos que sirven al mismo tiempo de pretexto y de coartada, los dirigentes, periodistas e intelectuales de la izquierda socioliberal buscan tanto excusarse de haber olvidado a las clases populares como desacreditar los esfuerzos realizados por lo poco que queda de la izquierda socialdemócrata antiliberal y de la izquierda anticapitalista para volver a conectar con el antiguo lenguaje militante progresista y, de este modo, con las clases populares. Y todo ello, no por miserabilismo o paternalismo, sino para situar a las clases populares en el lado de la emancipación colectiva cuando éstas se conviertan en un pueblo consciente y organizado para un cambio social real. Desgraciadamente, hasta la fecha, estos esfuerzos no han estado coronados con éxito en Francia. Y de hecho, es aquí donde se hace más nítida la intervención de los factores específicamente ideológicos que obran a favor de la despolitización del pueblo y, con ello, a su invisibilización.

De la despolitización a la invisibilización

A nivel internacional, no se puede eludir el desastroso impacto del doble fracaso del socialismo (o del comunismo) supuestamente “real” y la pérdida consecutiva de los ideales de transformación social que habían movilizado a las clases trabajadoras desde el siglo XIX. No solamente los regímenes considerados como la encarnación de estos ideales se revelaron como sus propias caricaturas —a menudo dictatoriales y sangrientas—, sino que, además, tampoco llegaron a sobrevivir frente a sus rivales capitalistas. Hoy día, el proletariado ya no puede encontrar un régimen que concrete y simbolice un modelo positivo con el que poder identificarse, un modelo alternativo a la llamada “democracia de mercado”, y tampoco puede, por tanto, figurar ante los ojos de las otras clases ni ante los suyos propios como una fuerza social capaz de llevar a la humanidad hacia un futuro mejor o incluso “radiante”.

A nivel nacional, los defensores del orden establecido aprovecharon esta quiebra de los ideales socialistas o comunistas y el desánimo que provocó en las clases populares para desarmarlas intelectualmente. En Francia, desde mediados de los años setenta y acompañando la ofensiva económica neoliberal, se desató también una embestida ideológica de gran amplitud. Politiqueros, periodistas e intelectuales de salón se coaligaron para imponer un “pensamiento único” conformista que convenciese a las clases populares de que el parlamentarismo del capital, rebautizado como “democracia de mercado”, era el horizonte insuperable de nuestros tiempos y de los tiempos venideros.

En este contexto, la referencia progresista al «pueblo» desapareció del lenguaje político. Han sido sustituidas por dos categorías tranquilizadoras para los poderosos y sus servidores con poder político: la alienante referencia al «consumidor» o al «ciudadano», ecto-

plasma sin identidad de clase, definido por su adhesión y participación gregarias –las más de las veces como figurantes y nunca como actores– en las instituciones representativas estatales o paraestatales, como es el caso de algunas asociaciones subvencionadas por el Estado. En cuanto al calificativo «popular», sirve hoy para designar lo que cuenta con la preferencia de la población, o más bien del público, ya que, en nuestra «sociedad del espectáculo», la popularidad depende principalmente del favor de los *mass media*. Se trata de la población que las clases dominantes, burguesas y neo-pequeño-burguesas, identifican con la parte menos educada y menos culta, cuyos gustos son considerados vulgares. Consecuencia: lo que es relativo al pueblo, propio del pueblo, lo que procede del pueblo como medio social es ignorado, despreciado o estigmatizado, y la gente que no comparte esta actitud resulta sospechosa y acusada de populista.

No se puede analizar este fenómeno sin acudir a un concepto fraguado por el sociólogo Pierre Bourdieu para describir un aspecto fundamental de la dominación de clase: la violencia simbólica. A diferencia de la violencia física directa (la represión, la coerción abierta), la violencia simbólica se caracteriza por ser indirecta, invisible, soterrada, implícita o subterránea, por esconder la matriz basal de las relaciones de fuerza subyacente al orden social. Esto hace difícil cualquier contestación o revuelta, y sirve para pacificar las relaciones en el seno de la sociedad. La clase dominante tiene el poder de imponer subrepticamente su propia visión del mundo –a la vez idealista y materialista (en el sentido común del término), moralista y utilitarista– como objetiva y universal (por ejemplo, a través de las nociones de «interés general» o de «bien común») de tal forma que los dominados no disponen de otro modo de pensamiento que el de los dominantes y, al interiorizarlo, no evidencian la violencia simbólica o son inconscientes de la presión que ella ejerce sobre ellos y contra ellos. La mayoría de los miembros de las clases populares, por ejemplo, no se percatan de que la información y la comunicación no son otra cosa que propaganda o publicidad.

Las prácticas de la violencia simbólica forman parte de estrategias elaboradas en el contexto de las relaciones de dominación capitalistas que participan en la reproducción de los roles sociales, el estatus, el género, la posición social, las categorías cognitivas o las estructuras mentales. Son puestas en juego –por separado o conjuntamente– como parte de una reproducción encubierta y sistemática. A través de este proceso de sometimiento, los dominados perciben la jerarquía social como legítima y natural, y hacen suya la visión que los dominantes tienen del mundo o, más bien, la visión que, a través de los medios de comunicación, quieren difundir hacia las clases populares. Esto conlleva que estas tengan una representación negativa, desvalorizante de sí mismas. La violencia simbólica está, de este modo, en el origen de un sentimiento de inferioridad o de insignificancia entre los dominados. De ahí el desaliento, la resignación y el repliegue que se puede observar entre las clases populares y que contribuye a ser ignoradas por las otras y a hacerse ellas mismas, por su propia cuenta, invisibles.

Un urbanismo antipopular

Sin embargo, la invisibilización de las clases populares no se limita a su existencia como clases laborales. También se ha prolongado y acentuado por las transformaciones de su inscripción territorial como habitantes. Hasta los años de las décadas cincuenta y sesenta, el barrio popular se identificaba con el barrio obrero. Éste era el terreno de una sociabilidad y una solidaridad específicas que consolidaban los lazos creados en la vida profesional. La presencia obrera era tan fuerte que influía en los habitantes de otras clases, no sólo a los empleados sino también a los artesanos y pequeños comerciantes. La proximidad entre los lugares de trabajo y las viviendas dotaba a la identidad obrera de dos bases territoriales estrechamente conectadas que favorecían movilizaciones masivas de clase. El barrio podía constituir un bastión para la resistencia política e incluso, a veces, para la contraofensiva, ya fuera violenta (como ocurrió en París en el siglo XIX) o electoral (como pasó después en algunos suburbios obreros o a escala de municipios enteros en regiones industriales), hasta tal punto que representantes políticos surgidos de grupos estables de obreros cualificados pudieron acceder al poder municipal antes de que los partidos de izquierda se empezaran a “pequeño-aburguesar”.

Claro está que, de una manera general, por motivos económicos, políticos e ideológicos, las clases dominantes no podían aceptar que el predominio de las clases populares se perpetuase en ciertos espacios urbanos, ya fuese a nivel de un municipio entero o de los barrios céntricos. De ahí que uno de los objetivos fundamentales de la política urbanística fuera acabar con este tipo de situaciones siguiendo dos ejes, a saber, expulsar a las clases populares hacia la periferia y organizar su dispersión espacial. Esto se llevó a cabo a través de un urbanismo que se puede calificar de antipopular, conjugado con las facilidades otorgadas por los poderes públicos a la especulación inmobiliaria. A la marginación socioeconómica de las clases populares se añadió así su marginación socioespacial.

Antes de pasar revista a los distintos modos de alojamiento de las clases populares y ponerlos en relación con su visibilidad urbana, diré algunas palabras acerca de los ciudadanos que se pueden calificar de invisibles. Dejando de lado aquellos que lo son ya *de facto*, es decir los 67.000 encarcelados y alojados de forma provisional o prolongada por el Estado (cuya mayoría proviene de las clases populares), hay actualmente en Francia alrededor de 120.000 personas sin vivienda que sobreviven en la calle. Hombres y mujeres sin trabajo, franceses o inmigrantes, encuentran su lugar en el espacio público haciendo de él su “hogar”, si es que se puede decir así. A primera vista, no se les puede clasificar como “invisibles”, ya que están física y visualmente muy presentes en los espacios públicos céntricos, donde llegan a ser considerados como indeseables. Con procedencias diversas y por motivos diferentes, han ido ocupando plazas, parques y paseos, y han creado sus propios luga-

res de estancia, encuentro y convivencia. Como es sabido, son objeto de frecuentes medidas de “limpieza” orientadas a erradicarlos de los espacios públicos más visibles, donde pueden crear problemas o desentonar con el maquillaje de unas urbes perfectas, ordenadas y pacíficas. A los individuos sin hogar se suman 45.000 personas que viven en alojamientos improvisados (garajes, sótanos, casetas de jardín, coches abandonados) y 110.000 más que habitan en campings, caravanas o *mobile homes*. Otros logran un techo alquilando precarias habitaciones de hostales o pisos amueblados (700.000) o alojándose con parientes o amigos (más de un millón, de los cuales 200.000 viven en condiciones muy difíciles). Entre los que tienen techo pero no vivienda, la casuística laboral es variada: unos están sin empleo y otros trabajan más o menos habitualmente y de forma legal. De hecho, cerca del 30% tiene un empleo y el 90% son obreros o empleados. No obstante, la carencia de alojamiento propio priva a todos ellos de un elemento esencial para constituir su identidad personal y social, y, por tanto, también ciudadana.

Innumerables estudios urbanos han tratado de la desposesión de las clases populares de su derecho a la ciudad y, más concretamente, a la centralidad urbana.⁹ Por eso, no creo que valga la pena pararse a discutir sobre las políticas urbanas, ya sean urbanísticas o de vivienda, orientadas a la recualificación, renovación, rehabilitación, revitalización, redinamización, renacimiento urbano, etc., a las que se podría añadir el término «regeneración», tan en boga en España y con connotaciones biológicas y naturalistas. Todo el mundo adivina –a pesar de que muchos fingen ignorarlo por prudencia oportunista– la lógica de clase de la política urbana que encubre este vocabulario habitual, consensuado y euforizante de los urbanistas, arquitectos y “comunicadores” (o sea, propagandistas) de los ayuntamientos. Esta lógica se resume muy bien con dos palabras, utilizadas siempre con cautela porque podrían revelar lo que importa tapar: «reconquista urbana».

En el frente urbano, se está llevando a cabo en las grandes ciudades una guerra de baja intensidad y de larga duración. Ocurre en Francia como en otros países. ¿Quién es el enemigo? En principio, la pobreza, la insalubridad y la inseguridad; en realidad, las clases populares con ingresos bajos y hábitos contraproductivos que ocupan un sitio indebido en lugares que deben ser “revalorizados”, es decir, a los que hay que dar valor en el sentido simbólico y, sobre todo, financiero del término, más todavía si se toma en cuenta el papel clave de la especulación inmobiliaria en este proceso que es a la vez “espontáneo” (es decir, según las leyes del mercado de la vivienda) y programado (por la política urbanística). En este último caso, la “problemática del proyecto”, como se dice en las escuelas de arquitectura a propósito de la transformación de los barrios populares bien ubicados, es hacerlos lisos y asépticos, elevar su *standing*, mejorar su imagen. Evidentemente, esta mejora física

⁹ Esta definición del derecho a la ciudad es muy restrictiva. Tanto para el sociólogo Henri Lefebvre como para el geógrafo David Harvey (los teóricos más reconocidos en esta materia), no se trata solamente de un derecho de acceso y uso, sino del derecho del pueblo a intervenir directa y activamente en la concepción y la configuración del espacio urbano.

implica una “mejora” social. Los viejos inmuebles deteriorados que se alquilaban a personas poco solventes dejan sitio a nuevos edificios residenciales o a casas renovadas donde ya no habrá sitio para ellas. Los bares y pequeñas tiendas tradicionales desaparecen en favor de cafés de moda, *boutiques* de tendencia y galerías de arte. Se trata de atraer a una clientela de clase media adinerada y culta, que busca proximidad a la amenidad de los centros urbanos pero sin la mezcolanza social con las clases inferiores. La diversidad social del barrio donde se establecen es más un decorado que estos neopequeños burgueses valoran a posteriori para hacer alarde de progresismo y de anticonformismo. En realidad, al establecerse en los barrios populares, no obran de manera militante o humanitaria sino principalmente por obligación económica. Poco les importa que su presencia contribuya al alza los precios de venta o alquiler en la vecindad, y que esto acelere la salida de la gente del pueblo a quienes, además, hacen sentir su inferioridad por la exhibición de prácticas culturales diferenciadas y formas de vida elitista. El concepto de «gentrificación» define esta colonización de los barrios populares, pero se podría inventar el neologismo “despopularización”, tomándolo en un sentido figurado para designar este proceso que, si bien no tiene como fin echar al pueblo fuera de sus barrios, es precisamente esto lo que está provocando de facto.

Entonces, ¿dónde vive la mayoría de los habitantes de las clases populares francesas, de origen inmigrante o no, una vez que sabemos de las dificultades cada vez mayores que tienen para permanecer en los barrios céntricos? Durante los años de prosperidad de la posguerra, llamados en Francia «los treinta gloriosos», empezó la separación entre empleo y residencia, con la construcción, primero, de los grandes polígonos de vivienda social y, luego, con el desarrollo de urbanizaciones de casas unifamiliares, unos y otras alejados de los lugares de trabajo que, al mismo tiempo, se diversificaban. Ninguno de los casos favorece la visibilidad urbana. Estas políticas urbanísticas contribuyeron a la desagregación de la clase obrera, cuyos miembros tendieron a replegarse en los nuevos hogares, más confortables que las viviendas antiguas, donde, en adelante, pasarían una buena parte de su tiempo libre en detrimento de la sociabilidad de barrio, por no hablar del compromiso militante. Sumado a ello, la desindustrialización y la transformación del mercado laboral terminarían por romper el lazo entre trabajo y alojamiento en un contexto de aumento del paro y de la precariedad.

En los *polígonos de vivienda social*, hoy se encuentran relegados los trabajadores menos cualificados y más precarios, con una fuerte proporción de familias de origen extranjero (magrebíes, subsaharianos, etc.). Alrededor de 4,2 millones de habitantes viven en estos barrios, o sea el 7% de la población francesa. A primera vista, parecería poco acertado hablar en términos de invisibilización urbana de las clases populares. De hecho, hace casi 40 años que estos conjuntos de viviendas sociales –las *cités* en lenguaje periodístico francés– llaman la atención por ser escenarios de las llamadas “violencias urbanas”, que

constituyen una de las preocupaciones mayores de los sucesivos gobiernos franceses y uno de los temas preferidos de los medios de comunicación. La presencia de una juventud masculina poco escolarizada y sin porvenir, más o menos rebelde y a veces delincuente, ha hecho que estas zonas residenciales adquieran mala fama. Nadie, ni las autoridades, los periodistas, ni siquiera la propia población que allí reside, las considera barrios populares en el sentido tradicional y positivo del término. Tienen la reputación de ser barrios “difíciles”, pero no por las dificultades de todo tipo que sufren sus habitantes (afectados por la precarización, la pobreza y, en el caso de la población árabe o negra, también por el racismo y la discriminación), sino por lo difícil que resulta mantener el orden público en esas zonas urbanas. Debido al uso de la violencia u otras formas de acción ilícitas, como los disturbios que siguieron a la muerte de un joven a manos de la policía, las movilizaciones que surgen en estas zonas son siempre rápidamente descalificadas por el poder mediático, olvidando el hecho de que a menudo están vinculadas a un sentimiento de pertenencia a un territorio propio y al rechazo de las desigualdades y las injusticias. Lo tuvieron que reconocer finalmente los propios dirigentes políticos que dieron la orden de implantar el Estado de emergencia en el año 2005 ante la generalización de la revuelta juvenil que prendió en decenas de *cités*: los enfrentamientos con la policía y la quema de edificios públicos y coches fueron una forma de protesta social contra las incómodas condiciones de existencia impuestas a la juventud y a sus padres.

Las clasificadas oficialmente como *zonas urbanas sensibles* –más de 700–, recientemente rebautizadas como *barrios prioritarios* –incluidos en su mayoría en las «zonas de seguridad prioritarias»–, son el blanco de lo que se llama en Francia la «política de la ciudad» (con esta u otra denominación), y que resulta ser, en realidad, una “policía” de la ciudad en la que se conjuga la prevención y la represión, es decir, medidas suaves y duras que constituyen en conjunto lo que un sociólogo crítico ha llamado y denunciado como «socioapartheid».¹⁰ El propio primer ministro, Manuel Valls, al intentar explicar los atentados de enero 2015 llevados a cabo en París por yihadistas salidos de las *cités* francesas, reconoció públicamente el efecto negativo de la relegación urbana de los guetos y de la discriminación, y llegó incluso a declarar que en Francia existía «un *apartheid* territorial, social, étnico». ¡Eso, después de 40 años de «política de la ciudad»!

Cuando se trata de estos barrios, los discursos autorizados (es decir políticos o policiales que son en general muy parecidos, mediáticos o académicos), aunque usan de vez en cuando la expresión «barrios populares», no se refieren al pueblo para designar a sus habitantes. En general, se habla de “pobres”, de “sectores desfavorecidos”, de “poblaciones frágiles o vulnerables” o simplemente de “excluidos”. Sin embargo, la tradición popular de ayuda mutua y autorganización de la vida colectiva sigue viva entre las familias, como

¹⁰ M. Rigouste, *La domination policière. Une violence industrielle*, La Fabrique, Paris, 2012.

lo demuestran las numerosas asociaciones de vecinos, aunque su papel pueda parecer un poco ambiguo. Por un lado, a iniciativa de colectivos nacidos en su seno, las clases populares suelen hacerse presentes en el espacio público a través de manifestaciones reivindicativas de nuevos derechos o para protestar contra determinadas políticas que acentúan su marginación (en particular, la «renovación urbana», sinónimo de expulsión). Por otro, están la mayoría de asociaciones, cuya vocación es la gestión local de las políticas sociales. Son las encargadas de la distribución de recursos entre los beneficiarios de las ayudas del Estado, lo que las pone en una situación de dependencia con respecto a las autoridades. Así, sustentadas y financiadas por éstas, suplen las carencias del Estado de bienestar a través de la llamada “democracia participativa” y buscan resolver ciertos problemas de los habitantes sin jamás remontarse a las causas estructurales que están en su origen, pues en el caso de hacerlo correrían el riesgo de ser acusadas de “politización” o de ejercer una militancia poco acorde con la condición de ciudadanos responsables. Así pasa, por ejemplo, con la educación –se podría hablar de “reeducación”– y la políticas de tiempo libre destinadas a los jóvenes, cuya finalidad principal parece que no es otra que la de mantenerlos ocupados.

Esta ambigüedad de la labor de las asociaciones y de los poderes públicos que las subvencionan resulta especialmente evidente en relación con la cultura popular juvenil, principalmente la musical, que se ha desarrollado en estos barrios en mestizaje con las aportaciones del otro lado del Mediterráneo (*rai*) o con las importaciones de los guetos estadounidenses (rap, hip-hop, etc.). Dado que sus creadores y su público forman parte de una juventud que pasa por ser una “chusma” perturbadora de la tranquilidad pública, esta cultura, que es considerada despectivamente “cultura de calle”, se asimila a prácticas fuera de las normas o incluso delictivas, y es sospechosa de incitar a la rebelión. Sin embargo, también puede ser recuperada, instrumentalizada y finalmente neutralizada como cultura urbana, antes de ser mercantilizada e integrada en la cultura de masas, puesto que los poderes públicos ven en ella un medio para satisfacer pacíficamente el deseo de reconocimiento de los jóvenes rebeldes y esperan que, por esta vía, dejen de manifestarlo en el espacio público de una manera violenta.

Las clases populares con empleo estable e ingresos suficientes tratan de evitar esos barrios –vistos como lugares estigmatizantes de desorden, promiscuidad y violencia– y prefieren alojarse en las *urbanizaciones de casas unifamiliares* ubicadas en la periferia de las ciudades o incluso en espacios semirrurales. En estas zonas residenciales “lejos de todo”, como anuncian los carteles promocionales, las familias de las clases populares se someten a la dominación cultural de los representantes de la pequeña burguesía asalariada (cuadros, técnicos, ingenieros, docentes, trabajadores sociales). Y, al mismo tiempo que opera la identificación con los sectores pequeño burgueses, los obreros y empleados convertidos en propietarios tienden también a diferenciarse de los habitantes de menor status social que han

tenido que quedarse en los polígonos de viviendas sociales, acelerando así la desagregación de las solidaridades de clase.

Ocurre, sin embargo, que el porcentaje de las clases populares puede llegar a ser en ocasiones tan importante que permite a sus representantes dominar el tejido asociativo y acceder al poder municipal. En ese caso, pueden organizar el tiempo libre de los habitantes a través de actividades deportivas, juegos para niños, reuniones recreativas para ancianos, *kermesse*, bailes y otras fiestas colectivas. Pero, aunque esta supremacía numérica permita consagrar la hegemonía de una élite local procedente de las fracciones superiores de las clases populares, también contribuye al mismo tiempo a apartar a las franjas más débiles de aquellas que lograron alojarse en casas unifamiliares. De todos modos, considerando la ciudad en su conjunto, la visibilidad urbana de estas clases populares suburbanas, dispersas en urbanizaciones alejadas unas de otras, es muy limitada y políticamente casi inexistente. Cuando se habla de suburbios residenciales en Francia, se alude casi exclusivamente a aquellos donde reside la burguesía o las franjas superiores de la pequeña burguesía intelectual.

Por último, están también los *barrios populares antiguos* en el centro de las ciudades donde todavía no ha llegado la renovación y la gentrificación porque son –provisionalmente– considerados poco “interesantes” por los promotores y las autoridades. Sin embargo, una gran parte de las clases populares francesas no desea seguir viviendo en los inmuebles y viviendas degradadas de estos barrios, y ha sido poco a poco sustituida por una población venida en su mayoría –o exclusivamente– de las antiguas colonias francesas o de otros países del Sur (India, Pakistán y, ahora, China). En estos barrios, la visibilidad de estos nuevos habitantes es fuerte y, a menudo, dependiendo de su origen geográfico y categoría social, el resto de los ciudadanos perciben estos espacios como exóticos pero también, a veces, como insidiosos. En París, por ejemplo, una parte del distrito 13, poblado mayoritariamente por habitantes cuyos antepasados inmigraron desde Vietnam, Camboya o Laos, y que pertenecen a la clase media, gozan una reputación positiva entre el resto de parisinos y las autoridades de la ciudad. En cambio, barrios de los distritos 18 y 19 de París, poblados por emigrantes venidos de África subsahariana, a menudo sin cualificación reconocida en Europa, a veces sin papeles o incluso clandestinos, son considerados problemáticos. Las prácticas y las relaciones colectivas de sus habitantes son presentadas y percibidas como persistencias de un modo de vida inadaptado, cuando en realidad, estando basadas en la solidaridad de vecindad y frecuentemente en “apaños” más o menos ilegales (trabajo negro, tráfico, prostitución), resultan totalmente contemporáneas de un mundo urbano donde la precariedad y la pobreza no dejan de desarrollarse. En todo caso, unos y otros no son vistos como barrios populares sino como “barrios étnicos”.

En resumen, la visibilidad urbana de las clases populares ha disminuido intensamente en Francia en los últimos tiempos, confirmando y reforzando la invisibilización que también

experimentan como clases trabajadoras. Una evolución que viene acentuándose con el aumento de la precariedad laboral. La inscripción de las clases populares en el espacio social a través del empleo y del salario está siendo sustituida de forma creciente por una adscripción de base territorial. Sin embargo, al contrario de lo que plantea la sociología integracionista, no se puede concluir que tal sustitución esté contribuyendo a reafirmar su visibilidad urbana. De hecho, mientras que la aristocracia obrera y los empleados cualificados tienden a copiar el modo de vida de la pequeña burguesía, los trabajadores desempleados o con empleos intermitentes se repliegan al interior de su hogar reduciendo el contacto con el mundo exterior al que les proporciona la televisión.

La invisibilización urbana de las clases populares tiene mucho que ver con la huella creciente que ejerce sobre la ciudad la clase dominante y sus servidores; un poder paradójicamente poco visible, incluso ahora que el espectáculo de las costosísimas sedes sociales y equipamientos culturales de alta gama que se erigen para realzar la imagen de marca de las capitales del capital no debería dejar lugar a dudas sobre la identidad social de sus destinatarios. Desde esta perspectiva, cabe pensar que el paso de la *ciudad productiva* a la *ciudad creativa*, por retomar una de las temáticas preferidas del *marketing urbano*, terminará dejando fuera del juego a las clases sociales ligadas al estadio precedente. Por eso, el derecho a la ciudad —es decir, a la apropiación colectiva del espacio urbano por las clases populares, ya sea para usarlo o para reconfigurarlo— sigue siendo hoy día una utopía. Para que pueda hacerse realidad, habría que poner fin a la reconquista burguesa y neo-pequeño-burguesa de la ciudad, esto es, haría falta una revolución que no fuera solamente urbana sino también social, por no decir socialista. Ello implicaría que una parte de la pequeña burguesía intelectual —incluidos, por supuesto, arquitectos, urbanistas e investigadores de las ciencias sociales— rompiera la alianza objetiva, y a menudo subjetiva, que mantiene con la clase dirigente y se solidarizara con las clases populares. De esta forma sería posible pasar de un régimen oligárquico a otro realmente democrático en el sentido propio de la palabra; un régimen que otorgaría a las clases populares una visibilidad permanente en el espacio urbano.